

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CATALUÑA

(PRIMER SEMESTRE 2017)

MARINA RODRÍGUEZ BEAS

Profesora de Derecho Administrativo

Universitat Rovira i Virgili

—

Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)

Sumario: 1. Introducción. 2. La Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2017, y su impacto medioambiental. 3. El impacto de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, sobre la legislación ambiental. 3.1. Cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos y del agua. 3.2. El impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales. 3.3. El impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos. 3.4. El impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. 3.5. La modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo. 3.6. Modificaciones legislativas en materia de ordenación ambiental. a) La modificación de la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente. b) La modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos. c) La modificación de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. 3.7. Modificaciones legislativas en materia de ordenación de aguas. 3.8. Modificaciones legislativas en materia de medio natural. 3.9. La modificación de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica. 4. Otras normas y actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección medioambiental.

1. INTRODUCCIÓN

Durante el período objeto de análisis (del 1 de octubre de 2016 al 30 de marzo de 2017), se han producido un buen número de novedades normativas en materia ambiental en Cataluña, aun cuando, curiosamente, no se ha aprobado ninguna norma con rango de ley específicamente ambiental. La técnica legislativa empleada ha sido, como ya había sucedido en los años anteriores, la utilización de una ley de acompañamiento a los presupuestos para modificar algunas leyes ambientales catalanas. De nuevo, se utiliza una ley de medidas fiscales, financieras y administrativas para introducir algunas reformas de importancia ambiental, pero también para crear algunos tributos propios. En efecto, a través de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, se han modificado, entre otras leyes ambientales, la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación de las actividades de incidencia ambiental; el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos; la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades; el Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña; la Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones, los núcleos de población, las edificaciones y las instalaciones situados en terrenos forestales; la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales. Asimismo, la Ley 5/2017 también ha creado dos nuevos tributos ambientales propios de la Generalitat de Catalunya: el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos; y el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.

En cuanto a los proyectos de ley en trámite, en este período cabe destacar que el Proyecto de Ley de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales superó, en la sesión del Pleno del Parlament de Catalunya celebrada el 22 de diciembre de 2016, el debate a la totalidad sin ninguna enmienda; y que continúan su curso la tramitación del Proyecto de Ley de Comercio, Servicios y Ferias y la del Proyecto de Ley de ordenación de las actividades de espectáculos públicos y recreativas.

Paralelamente, se están gestando varias iniciativas normativas de gran interés en materia ambiental. En primer lugar, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciado un proceso participativo con los entes locales para la elaboración del Anteproyecto de Ley de calidad ambiental. En el marco de este proceso participativo, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha organizado, en colaboración con las diputaciones, unas jornadas informativas para exponer diferentes aspectos de la actual Ley 20/2009, así como las casuísticas en su aplicación, y, por otro lado, avanzar los objetivos del Anteproyecto de Ley de calidad ambiental, que la pretende sustituir. Los objetivos estratégicos que plantea el Anteproyecto de Ley son: transición hacia una producción ambientalmente sostenible, con un uso eficiente de los recursos y de la energía y, por tanto, más competitiva; evolución de un modelo de actividad intervenida previamente a un modelo de empresario responsable; ajustar la normativa catalana al marco comunitario europeo y la legislación básica; facilitar los regímenes de menor intervención previa; disponer de una base de datos ambiental de actividades; y consolidar la Administración electrónica en todos los regímenes de intervención. En segundo lugar, mediante el Acuerdo del Govern de 13 de diciembre de 2016, se ha aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de Ley de ordenación del litoral, que se someterá a información pública y audiencia de las entidades afectadas. El Anteproyecto, publicado el pasado 16 de enero de 2017 en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC), pretende desarrollar la competencia exclusiva en ordenación del litoral establecida en el artículo 149.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la competencia en ejecución y gestión de las obras de interés general situadas en el litoral catalán, regulada en el artículo 149.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a través de la articulación de un

modelo de gestión integrada del espacio costero catalán, con la Administración de la Generalitat como administración de referencia y un mayor protagonismo de los ayuntamientos. Esta iniciativa legislativa, mediante sus instrumentos de ordenación y gestión, tiene por finalidades: a) facilitar, por medio de una planificación racional de las actividades, el desarrollo sostenible de las zonas costeras, garantizando que se tengan en cuenta el medio ambiente y los paisajes de manera conciliada con el desarrollo económico, social y cultural; b) preservar las zonas costeras, en beneficio de las generaciones presentes y futuras, y como garantía del desarrollo turístico y económico de calidad; c) garantizar la utilización sostenible de los recursos naturales; d) garantizar la preservación de la integridad de los ecosistemas costeros, así como la de los paisajes costeros y la de la geomorfología costera; e) prevenir y reducir los efectos de los riesgos naturales, y en particular del cambio climático, que puedan ser causados por actividades naturales o humanas; y f) garantizar la coherencia entre las iniciativas públicas y privadas y entre todas las decisiones de las diversas autoridades públicas que afecten a la utilización de la zona costera¹. Por último, el Govern también ha aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de Ley de montaña, que sustituirá a la Ley 2/1983, de 9 de marzo, de alta montaña, y que nace con la voluntad de: a) favorecer el crecimiento demográfico y el establecimiento de residentes permanentes para la superación del actual umbral de despoblamiento de muchas áreas de montaña; b) fomentar la implantación y el desarrollo de empresas y proyectos económicos mediante la creación de políticas de atracción; c) preservar y, al mismo tiempo, poner en valor los activos territoriales estratégicos, entre ellos, el patrimonio natural, el arquitectónico, el cultural y el paisajístico; d) minimizar la posición territorial periférica respecto a los principales nodos de actividad, garantizar la mejora de la movilidad y la comunicación y una adecuación de los servicios a las necesidades específicas; e) ajustar el conjunto de las políticas públicas y la prestación de servicios a la realidad y especificidad de los ámbitos de montaña; y f) promover instrumentos de participación, propuesta y concertación.

¹ Art. 3 Anteproyecto de Ley de ordenación del litoral.

2. LA LEY 4/2017, DE 28 DE MARZO, DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PARA EL 2017, Y SU IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

La Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2017, incluye en su título V algunas normas tributarias que afectan al canon del agua. Concretamente, determina los valores de base por volumen para usos domésticos e industriales y asimilables y el valor de cada unidad de parámetro de contaminación del canon del agua a fin de determinar el tipo de gravamen específico de una manera individualizada durante el año 2017; los valores para determinar la cuota del canon del agua correspondiente a los establecimientos ganaderos; y los valores para la determinación objetiva de la cuota correspondiente a usos industriales de agua para la producción de energía eléctrica efectuados por centrales hidroeléctricas.

Esta Ley se completa con noventa y ocho disposiciones adicionales. Entre tales disposiciones, cabe destacar cuatro desde la perspectiva ambiental. En primer lugar, la disposición adicional 9 crea el Fondo de Lucha contra el Cambio Climático, que tiene el objetivo de impulsar actuaciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Este Fondo se dota, como mínimo, con el 25% de los ingresos obtenidos, en el supuesto de que se apruebe, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica con emisiones de CO₂.

En segundo lugar, la disposición adicional 10 crea el Fondo del Patrimonio Natural. Este tiene el objetivo de impulsar actuaciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático y establece que deberá dotarse, como mínimo, con el 25% de los ingresos obtenidos, en el supuesto de que se apruebe, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica con emisiones de CO₂.

En tercer lugar, en la disposición adicional 92 se establece que el Govern, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe destinar los recursos necesarios para la realización de una serie de actuaciones con incidencia medioambiental.

Finalmente, la disposición adicional 96 establece que el Govern, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe dedicar una partida para

realizar actuaciones de reforestación, mantenimiento y limpieza sobre unos determinados espacios naturales.

3. EL IMPACTO DE LA LEY 5/2017, DE 28 DE MARZO, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DEL SECTOR PÚBLICO Y DE CREACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SOBRE ESTANCIAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS, SOBRE ELEMENTOS RADIOTÓXICOS, SOBRE BEBIDAS AZUCARADAS ENVASADAS Y SOBRE EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO, SOBRE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Recientemente, se ha publicado en el DOGC la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. De nuevo, como ya se había hecho en años anteriores, a través de una ley de acompañamiento de los presupuestos se aprueba una batería de modificaciones legislativas que afectan al medio ambiente o a ámbitos conexos con este. Y se modifican mediante medidas administrativas otras leyes en diferentes ámbitos: vivienda y urbanismo, ordenación ambiental, ordenación de aguas y ordenación territorial; medio natural, agricultura, pesca y alimentación, infraestructuras y movilidad; residuos, políticas sociales, políticas sanitarias, espectáculos públicos y actividades recreativas, turismo, consumo, seguridad pública, código civil, ordenación de equipamientos comerciales y puertos de la Generalitat. También se establecen medidas administrativas de simplificación del régimen de intervención de las actividades económicas, de contratación pública y en materia de función pública, patrimonio, finanzas públicas, tasas y precios públicos, entre otros ámbitos. Esta técnica legislativa merece ser objeto de crítica, ya que se regulan en un texto único las modificaciones de diversas normas con rango de ley sobre materias muy diversas sin conexión entre sí.

A los efectos de esta crónica, nos centraremos en las principales modificaciones en materia ambiental. Todo ello sin olvidar que también en el marco de esta Ley se incluyen algunas modificaciones que afectan a algunas tasas (entre otras, las de la Agència de Residus de Catalunya; las de los permisos de caza mayor y menor; las de los servicios de autorización ambiental de actividades o las de los servicios de revisión, control e inspección de certificados de eficiencia energética de los edificios), y, en el título III de la parte tercera, “Medidas en el ámbito del sector público”, algunas medidas de reestructuración y racionalización del sector público que afectan, entre otras entidades de derecho público de la Generalitat, al Servei Meteorològic de Catalunya y al de Pesca y acción marítimas.

3.1. Cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos y del agua

En el título I, dedicado a los tributos propios, se contemplan las modificaciones efectuadas en relación con el canon sobre la disposición del desperdicio de los residuos y sobre el canon del agua.

El artículo 1 de la Ley 5/2017 modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. Con esta modificación se incrementa el tipo de gravamen a 47,10 euros por tonelada de desperdicio de residuos municipales destinados a depósito controlado. También se incrementa el tipo de gravamen del canon de incineración de residuos municipales. El incremento de los tipos de gravamen se realizará de forma gradual en el plazo de cuatro años. Respecto al canon sobre el depósito controlado de residuos de la construcción, también se realizan modificaciones, fijándose su tipo de gravamen en la cantidad de un euro y medio por tonelada hasta el 31 de diciembre de 2017. Además, se añade un nuevo artículo 16 *undecies*, que establece una exención al canon de depósito controlado de residuos industriales. Para los casos incluidos en este supuesto, se establece un procedimiento de devolución, que se efectuará a instancia de parte, siempre y cuando se acredite fehacientemente que se ha satisfecho el canon.

En cuanto al canon del agua, las modificaciones se dirigen a proporcionar incentivos para que los usuarios utilicen eficientemente los recursos hídricos, introduciendo elementos correctores de la carga impositiva para los usuarios del agua que usan circuitos geotérmicos y para los usos destinados a riego eficiente. Además, se añade dentro de la consideración de beneficiarias de la tarifa social a las personas y unidades familiares que hayan acreditado ante la entidad suministradora que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, o a las que les haya sido reconocida, mediante un informe de los servicios sociales de la Administración local competente, la situación de riesgo de exclusión residencial².

3.2. El impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales

La Ley 5/2017 reforma el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales y lo define como un impuesto ambiental. Este impuesto grava la capacidad económica de determinados establecimientos comerciales que, por estar implantados en grandes superficies, provocan externalidades medioambientales negativas como consecuencia de la afluencia de vehículos particulares. Así, el hecho imponible es el impacto medioambiental derivado de la utilización de grandes superficies con finalidades comerciales.

Una modificación importante es la ampliación de los supuestos sujetos al impuesto mediante la incorporación de los grandes establecimientos comerciales colectivos y los grandes establecimientos comerciales que disponen de una superficie de venta igual o superior a los 1.300 metros cuadrados y que están situados fuera de la trama urbana consolidada o, en el caso de que esta no esté definida, fuera del núcleo histórico y de sus ensanches (art. 7.2).

Además, se reformula la base imponible, la cual se obtiene mediante la aplicación de una fórmula que tiene en cuenta el número de vehículos que, durante el período impositivo, acceden al aparcamiento del que dispone el establecimiento comercial. A esta base imponible se le debe aplicar una

² Se añade en un párrafo nuevo al final del apartado 8 del artículo 69 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña.

reducción de 27.000 vehículos en concepto de mínimo exento para obtener la base liquidable (art. 11). Como consecuencia de esta nueva configuración de la base imponible, se establece la obligación para los sujetos pasivos de presentar la autoliquidación y de efectuar el correspondiente ingreso entre los días 1 y 20 del mes de febrero siguiente a la fecha de devengo del impuesto.

3.3. El impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos

La Ley 5/2017, en el capítulo VII del título I, crea un nuevo tributo propio de la Generalitat, el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos.

El objeto de este impuesto es gravar el riesgo local medioambiental, y, en última instancia, sobre las personas, que comportan la producción de elementos radiotóxicos generados en reacciones termonucleares, la manipulación y el transporte de estos elementos, su custodia, mientras no sean debidamente neutralizados o depositados en un almacén de larga duración, y su dispersión, rutinaria o accidental (art. 52).

De acuerdo con el artículo 53, los ingresos de este impuesto quedan afectados a la financiación de los medios y de las actividades y actuaciones de protección civil expresamente destinados al control y, en su caso, la reducción de los riesgos derivados de la actividad gravada. Además, se crea un fondo con el 20% de la recaudación efectiva del impuesto, el cual se destinará a financiar actuaciones y acciones dirigidas a: la reactivación económica de las zonas afectadas por actividades gravadas por el impuesto; la prevención y moderación de los riesgos derivados de las actividades sometidas al impuesto; y el mantenimiento y la renovación de los sistemas de control y medición de los niveles de elementos radiotóxicos en el territorio.

3.4. El impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica

La Ley 5/2017 también crea el tributo propio sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Este impuesto tiene por objeto gravar las emisiones de dióxido de carbono que producen los vehículos y que

inciden en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de un tributo finalista que debe nutrir a partes iguales, con los importes recaudados, el Fondo Climático y el Fondo de Patrimonio Natural (art. 84.2).

El hecho imponible lo constituyen las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos aptos para circular por las vías públicas incluidos en las siguientes categorías (art. 85.1): a) turismos de la categoría M1: vehículos de motor de como mínimo cuatro ruedas, diseñados y fabricados para el transporte de personas, de hasta un máximo de ocho asientos; b) comerciales ligeros de la categoría N1: vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima admisible no superior o igual a 3,5 toneladas; c) motocicletas: vehículos de motor de como mínimo dos ruedas, diseñados y fabricados para el transporte de personas.

3.5. La modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo

En el ámbito urbanístico, la Ley 5/2017 introduce diferentes modificaciones en el texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. En primer lugar, a través de la modificación del apartado 2 del artículo 9, se determina que, si en las zonas de riesgo de inundación o de otros riesgos, de acuerdo con la legislación sectorial, pueden producirse daños a las personas o bienes, prevalecerán las limitaciones de uso del suelo establecidas en la legislación sectorial. También se especifica que incluso en el supuesto de que la legislación sectorial no establezca limitaciones en estas zonas de riesgo, tampoco se podrán llevar a cabo actuaciones de nueva urbanización, ni incrementar la edificabilidad o la intensidad del uso previstas por el planeamiento en suelo urbano ni edificar en los terrenos situados en suelo no urbanizable, salvo que se trate de una actuación urbanística que incluya entre las obras de urbanización las infraestructuras u otras medidas que la administración sectorial considere necesarias. Además, se añade al artículo un apartado, el 2 bis, donde se expresa que el planeamiento no puede establecer determinaciones que contravengan o dificulten la ejecución de los planes sectoriales que gestionen los riesgos, y, en particular, debe adaptar sus determinaciones a lo que establezcan estos planes en relación con las edificaciones y los usos preexistentes.

En segundo lugar, se modifican algunos preceptos reguladores del suelo no urbanizable. Entre estos, se modifica el apartado 2 del artículo 49, que afecta al procedimiento para la aprobación de proyectos de nuevas actividades y construcciones en suelo no urbanizable, los cuales deben someterse al informe de la comisión territorial de urbanismo que corresponda, que tiene que emitirlo en el plazo de dos meses a partir de que disponga el expediente. Se establece la necesidad de tener en cuenta, en la aprobación de los proyectos de nuevas construcciones en suelos no urbanizables, los posibles efectos sobre los acuíferos clasificados, las zonas vulnerables o las zonas sensibles declaradas de conformidad con la legislación vigente a fin de minimizar el impacto sobre el medio y de alcanzar los objetivos ambientales definidos por la Directiva 2000/60/CE, concretados en la planificación hidrológica.

Por otro lado, se modifica el apartado 1 del artículo 50, que regula el procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas de proyectos relativos a la reconstrucción y rehabilitación de las construcciones en suelo no urbanizable. En este caso, se establece que, si los proyectos son susceptibles de perturbar el funcionamiento normal de las explotaciones agrarias del entorno inmediato, deben incorporar en su memoria un análisis de las afectaciones agrarias que evalúe la incidencia del proyecto en relación con el funcionamiento de las explotaciones agrarias existentes y sobre las eventuales medidas para compatibilizarlo con dichas explotaciones.

En tercer lugar, también se establecen unas modificaciones que abordan la problemática de los campings situados en zonas de riesgo de inundación. En particular, se añade una disposición adicional, la decimonovena, en la que se establece que, para poder mantener la actividad de los campings legalmente implantados que, de acuerdo con la legislación sectorial, se encuentren en zonas de riesgo de inundación donde se pueden producir daños graves a las personas o los bienes, los titulares deben elaborar un plan de gestión del riesgo y costear y, en su caso, ejecutar las medidas correctoras que sean necesarias para prevenir los daños, de conformidad con el plan especial urbanístico tramitado a tal fin.

3.6. Modificaciones legislativas en materia de ordenación ambiental

En materia de ordenación ambiental, la Ley 5/2017 ha modificado tres normas con rango de ley en este ámbito: la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación de las actividades de incidencia ambiental; el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos; y la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

a) La modificación de la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente

La Ley 5/2017 modifica el artículo 18 de la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación de las actividades de incidencia ambiental, y determina que el órgano ambiental para los proyectos e instalaciones previstos en los anexos de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, es la ponencia ambiental. Pero, para el supuesto de proyectos e instalaciones no previstos en los anexos de la Ley 20/2009, el órgano competente será la dirección general del departamento competente en materia de medio ambiente que ejerza las funciones relativas a la evaluación de impacto ambiental en proyectos de infraestructuras. También se atribuye al órgano ambiental competente en la evaluación de impacto ambiental el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, así como la potestad sancionadora.

b) La modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

El Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, también resulta modificado en un buen número de preceptos, por lo que únicamente vamos a destacar algunas de las modificaciones más importantes. En primer lugar, se añade al artículo un apartado, el 5, donde se prohíbe la entrega gratuita de bolsas de caja o de entrega a domicilio de cualquier material plástico, incluido el plástico en general, el plástico oxodegradable y el plástico biodegradable, a excepción de las bolsas compostables que cumplan los requisitos de la norma UNE-EN 13432 o equivalente, en los puntos de venta de mercancías o productos.

En segundo lugar, se añade un artículo, el 19 bis, sobre el suelo alterado. Se establece que las personas causantes de una alteración del suelo deben presentar un programa de control y seguimiento periódico del suelo, o de los vapores o de las aguas subterráneas, que permita valorar la evolución de las sustancias contaminantes en el tiempo y el espacio. El citado programa debe ser aprobado por la Agència de Residus de Catalunya en el plazo de seis meses a contar desde su presentación. Los resultados de estos controles periódicos deben presentarse a la Agència de Residus de Catalunya con la periodicidad que se haya establecido en la resolución de aprobación. También se establece que la Administración podrá requerir la aportación de un plan de mejora ambiental cuando la evolución de la alteración se estime técnicamente no favorable. Además, se determina que la Agència de Residus de Catalunya llevará un registro administrativo de los suelos alterados en el que se hará constar la información ambiental relativa a su emplazamiento.

Finalmente, también destacamos el nuevo artículo 19 ter, que introduce los conceptos de *contaminación histórica* y *contaminación nueva*. Se considera histórica “la contaminación o la alteración de un suelo producida antes del 28 de agosto de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/1993, reguladora de los residuos. En caso de que no se pueda determinar el momento temporal en el que se produjo la contaminación o la alteración, se presume histórica la que tiene el origen en una actividad implantada antes de la fecha mencionada, con independencia de su continuidad en el tiempo”. Para este tipo de suelos, se establece que las medidas de descontaminación deben tener como finalidad devolverles la capacidad para desarrollar las funciones propias del uso a que

estuviesen destinados según el planeamiento vigente en el momento en el que se produjo la contaminación, garantizando unos niveles de riesgo aceptables de acuerdo con los respectivos usos de cada suelo. En los casos históricos, por razones justificadas de carácter técnico, económico o medioambiental, se permiten medidas de descontaminación y recuperación tendentes a reducir la exposición, siempre y cuando incluyan medidas permanentes de contención o confinamiento de los suelos afectados. En cambio, se considera contaminación nueva la que se ha producido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/1993. Para estos supuestos, las medidas de recuperación del suelo deben tener como finalidad su restablecimiento al estado anterior a la contaminación o, si este no es conocido, hasta llegar a un nivel de riesgo aceptable de acuerdo con el uso vigente presente, sin perjuicio de lo establecido por la letra f del artículo 19. En este caso de nueva contaminación, deben aplicarse obligatoriamente técnicas de recuperación tendentes a la eliminación del foco o de reducción de la concentración de los contaminantes en el suelo. Excepcionalmente, pueden admitirse la contención o el confinamiento si se demuestra la imposibilidad técnica, económica o ambiental de otras soluciones de recuperación.

c) La modificación de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades

La Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, ha vuelto a ser objeto de modificación a través de una ley de acompañamiento de los presupuestos. Pero en esta ocasión solo se añade un epígrafe, el 1.44, al apartado 1 (Energía) del anexo II: “centrales hidroeléctricas con una potencia superior a 10 MW”. En coherencia con esta modificación, también se añade un epígrafe, el 1.14, al apartado 1 (Energía) del anexo III, con el siguiente texto: “centrales hidroeléctricas con una potencia igual o inferior a 10 MW”.

3.7. Modificaciones legislativas en materia de ordenación de aguas

La Ley 5/2017 también introduce algunas modificaciones en el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto

Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre. Estas modificaciones afectan a aspectos concretos de la regulación de la Agència Catalana de l'Aigua y, en general, de la legislación en materia de aguas, como el régimen sancionador, los plazos en los procedimientos relativos a la seguridad de presas y embalses, los sistemas de control de los caudales en derivaciones de más de 10 hm³/año o los vertidos de aguas residuales, entre otros aspectos.

3.8. Modificaciones legislativas en materia de medio natural

En materia de medio natural, la Ley 5/2017 ha modificado seis normas: la Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones, los núcleos de población, las edificaciones y las instalaciones situados en terrenos forestales; la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales; la Ley 5/1995, de 21 de junio, de protección de los animales utilizados para experimentación y para otras finalidades científicas; el Decreto Legislativo 2/2008, de 25 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de protección de los animales; la Ley 34/2010, de 1 de octubre, de regulación de las fiestas tradicionales con toros; y la Ley 18/2001, de 31 de diciembre, de orientación agraria.

En relación con la prevención de los incendios forestales, se modifica el apartado 4 del artículo 4 de la Ley 5/2003 para atribuir al municipio competencia en los trabajos de limpieza a los que se refieren las letras *a*, *b* y *e* del artículo 3.1 si los sujetos obligados no los han realizado.

La modificación de la Ley de espacios naturales responde en buena medida a su necesidad de adaptación a la legislación vigente una vez transcurridos treinta años desde la aprobación de la norma.

En cuanto a la protección de los animales utilizados para experimentación y para otras finalidades científicas, se añaden dos disposiciones adicionales para adaptarla a la Directiva 2010/63/UE del Parlamento y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos. Desde esta perspectiva, se concreta, por ejemplo, que los centros descritos en el capítulo III deben disponer de personal suficiente *in situ* y que este debe recibir la educación y la formación adecuadas antes de ejercer la función de cuidar de los animales, practicar la eutanasia, realizar

procedimientos con animales y diseñar proyectos y procedimientos; asimismo, estos centros deben disponer, en cualquier caso, de un veterinario con conocimientos y experiencia en medicina de animales de laboratorio.

Con relación a la Ley de protección de los animales, se modifican varios aspectos destacables. En primer lugar, se modifica la letra a del apartado 2 del artículo 24 para endurecer los criterios para la venta de animales por internet, imponiéndose a las empresas proveedoras de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico que hagan publicidad de transacciones con animales la obligación de incluir en su sistema de difusión la advertencia de que los anunciantes deben mostrar en sus anuncios el número de inscripción en el Registro de Núcleos Zoológicos. En segundo lugar, se modifica el apartado 4 del artículo 46 con el fin de introducir la posibilidad de sustituir la imposición de sanciones pecuniarias por sanciones con las que se lleven a cabo actuaciones de educación ambiental o de prestación de servicios de carácter cívico en beneficio de la comunidad relacionadas con la protección de los animales, en el caso de la comisión, por primera vez, de infracciones de carácter leve. En tercer lugar, se modifica la atribución competencial para la imposición de las sanciones establecidas por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley. Y, en último lugar, se añade un apartado al artículo 51 para permitir la delegación de las competencias sancionadoras por la comisión de la infracción establecida por el artículo 44.4 c) a los municipios, los consejos comarcales o las entidades locales supramunicipales que lo soliciten.

Se modifica la Ley 34/2010, de 1 de octubre, de regulación de las fiestas tradicionales con toros, suprimiendo del anexo “Lista actualizada de los municipios donde se celebran fiestas tradicionales con toros” tres municipios (Olot, Roses y Torroella de Montgrí).

Por último, se añade un capítulo, el VII, a la Ley 18/2001, de 31 de diciembre, de orientación agraria, que establece el régimen sancionador en materia de gestión de las deyecciones ganaderas y otros fertilizantes y del personal técnico habilitado redactor de planes de gestión de deyecciones ganaderas.

3.9. La modificación de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica

Las modificaciones legislativas de la Ley 5/2017 en materia de simplificación del régimen de intervención de las actividades económicas se concretan en la modificación de diversos artículos de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica. De estas modificaciones, destacamos, en primer lugar, una serie de cambios que afectan a los regímenes de intervención de las actividades económicas inocuas o de bajo riesgo.

En segundo lugar, se modifica la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015 en relación con la documentación necesaria para el inicio de actividades que requieren informe preceptivo favorable por riesgo de incendio. Así, para poder iniciar la actividad, se exige que la persona interesada debe obtener y presentar en el ayuntamiento el certificado de acto de comprobación favorable en materia de prevención y seguridad respecto a incendios y atender los requisitos y las determinaciones ambientales.

Por último, se modifican unos determinados apartados del anexo I (“Actividades sometidas a régimen de declaración responsable”) y del anexo II (“Actividades sometidas a régimen de comunicación”).

4. OTRAS NORMAS Y ACTUACIONES DE INTERÉS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Además de las reseñadas, en el período objeto de análisis se han aprobado algunas otras normas y actuaciones de interés desde la perspectiva ambiental. Destacamos el Decreto 1/2017, de 3 de enero, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña para el período 2016-2021. Este Decreto se configura como el instrumento de la planificación hidrológica que tiene como objeto determinar las acciones y las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica de dicho distrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 bis del texto

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en el artículo 19 del texto refundido de la legislación en materia de aguas, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre. La planificación hidrológica del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, correspondiente al segundo ciclo (2016-2021), está integrada por el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña (2016-2021) y su Programa de Medidas. El Programa de Medidas se acompaña de un plan económico-financiero, del estudio ambiental estratégico y de la declaración ambiental estratégica. El ámbito territorial de este Plan está constituido por el distrito de cuenca fluvial de Cataluña, delimitado mediante el Decreto 31/2009, de 14 de febrero.

Como actuaciones de interés ambiental destacamos, en primer lugar, en materia de cambio climático, el Acuerdo GOV/6/2017, de 31 de enero, mediante el que el Govern ha aprobado las bases para constituir el Pacto Nacional para la Transición Energética, resultado del proceso de participación con la Mesa de Entidades y otros agentes sociales y académicos, como documento final consensuado en el marco del proceso de elaboración iniciado a raíz del Acuerdo del Govern de 15 de abril de 2014, sobre el impulso del Pacto Nacional para la Soberanía Energética. Este documento consensuado con la sociedad civil establece siete ejes estratégicos de actuación: garantizar el derecho fundamental de acceso a la energía y la defensa de los derechos de los consumidores; garantizar el abastecimiento energético con calidad y fiabilidad en su suministro; alcanzar el máximo nivel de ahorro y de eficiencia energética en la economía y sociedad catalana; maximizar la utilización de las fuentes de energía renovables, fundamentalmente las autóctonas; fomentar la investigación y la innovación energética como vectores de eficiencia y de creación de actividades empresariales; impulsar la democratización de la energía y la participación de la sociedad en el modelo energético; y ejercer las competencias plenas en materia de energía por parte de las instituciones catalanas en el marco de la Unión Europea.

También cabe destacar que el Govern ha realizado, cuatro años más tarde de su aprobación, el seguimiento y la evaluación de las medidas contempladas en la Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático. Como resultado de

esta tarea de seguimiento y evaluación, se concluye que se han impulsado un 83% de las medidas genéricas previstas en la Estrategia, entre otras: la redacción de una ley catalana sobre el cambio climático; el impulso de subvenciones para estimular la redacción de planes de adaptación de la Administración local; la incorporación de los retos del cambio climático en la planificación de las comarcas en Cataluña; el impulso de la publicación del Tercer Informe sobre el cambio climático en Cataluña; y el establecimiento de un sistema de seguimiento de las medidas previstas en la Estrategia. También se han iniciado el 72% de las medidas específicas, como, por ejemplo, la mejora en la eficiencia en el uso del agua o la promoción de la investigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad. Y solo un 4% de las medidas genéricas y un 12% de las medidas específicas no han empezado a aplicarse. También se constata que, de los once sectores evaluados, tres (gestión forestal, salud y urbanismo y vivienda) han obtenido una calificación satisfactoria en cuanto a las medidas correspondientes a la generación y transferencia de conocimiento; seis han avanzado, aunque todavía deben mejorar; y solo dos (industria, servicios y comercio, y turismo) han obtenido una calificación insatisfactoria. Además, paralelamente el Govern colabora con la ONU en políticas de desarrollo urbano sostenible y contra el cambio climático. Esta colaboración se materializó el pasado 20 de enero en la firma de un memorándum de entendimiento para impulsar proyectos conjuntos de desarrollo urbano sostenible y resiliencia urbana. Esto supone la primera acción de implementación y desarrollo en Cataluña de la llamada Nueva Agenda Urbana, aprobada el pasado mes de octubre en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, que tuvo lugar en Quito, Ecuador.

También cabe destacar el primer acuerdo institucional para la mejora de la calidad del aire en la conurbación de Barcelona. Se trata del primer gran compromiso común de las diferentes administraciones (Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona, Diputación de Barcelona y representantes locales) para reducir las emisiones vinculadas al tráfico en un 30% en el plazo de quince años.

Además, mediante el Acuerdo del Govern del día 3 de enero de 2017, se insta a los órganos de contratación de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de su sector público a cumplir una serie de previsiones: priorizar la compra, en primer lugar, de vehículos eléctricos y, en segundo lugar, atendiendo principalmente al tipo de recorrido, de vehículos híbridos o de gas (bifuel de gasolina); y aplicar la última versión de la Guía para la Compra Verde de Vehículos informada favorablemente por el Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. En el caso de no aplicar las prioridades indicadas, los órganos de contratación deberán emitir un informe justificativo de excepción. También se insta a los responsables de la gestión de las flotas de vehículos de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de su sector público a: incluir cursos de conducción eficiente y de conducción de vehículos de bajas emisiones en los planes de formación; dar de baja los vehículos de gasoil Euro 3 o inferior antes de finales del año 2018, tramitar su desguace en un centro autorizado y obtener el correspondiente certificado de destrucción; y realizar una diagnosis ambiental de su flota de vehículos de acuerdo con el informe de evaluación del Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental para las flotas. Con estas medidas se pretende conseguir un cambio en el planteamiento de las compras de vehículos de la Generalitat de Catalunya y así contribuir a la mejora de la calidad ambiental y la reducción de emisiones.

En segundo lugar, en el ámbito de la contaminación lumínica, también debe destacarse la Resolución publicada el 25 de enero de 2017 en el DOGC, por la que se declaran dos espacios con un cielo nocturno de calidad en Saldes (Berguedà). Es el primer municipio que dispone de este distintivo, que certifica las condiciones que permiten disfrutar de un medio natural nocturno de calidad, que se considera conveniente proteger mediante esta figura derivada del Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno.

En tercer lugar, cabe mencionar la Resolución TES/517/2017, de 10 de febrero, por la que se aprueba el Plan de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña para el período 2017-2019; y la Resolución TES/518/2017, de 10 de febrero, por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental Integrada de

Cataluña para el año 2017. El Plan correspondiente para el período 2017-2019 prevé el seguimiento y la vigilancia ambiental de 1.421 establecimientos, todos los autorizados en Cataluña que se clasifican en el anexo I.1 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. Este Plan se ejecuta mediante programas anuales que, basados en el Plan, recogen la información necesaria para realizar las inspecciones ambientales que se incluyen y priorizan y, al mismo tiempo, los recursos necesarios. De este modo, también se ha aprobado el Programa de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña para el año 2017, que prevé inspeccionar inicialmente 683 establecimientos, que representan un 48% del total del Plan 2017-2019. No obstante, el Programa también contempla la realización de otras inspecciones ambientales “no programadas” que pueden ser motivadas para: verificar el cese de actividades; investigar denuncias, accidentes e incidentes; o comprobar la corrección de los incumplimientos declarados en inspecciones “programadas”.

En cuanto al régimen de intervención ambiental, también debe destacarse el documento aprobado por la Ponencia Ambiental el 18 de octubre de 2016, que contiene la revisión y actualización de los criterios de sustancialidad de las modificaciones de las actividades de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. Estos criterios establecen los umbrales a partir de los cuales una modificación de una actividad debe considerarse sustancial. No habiéndose llevado a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, y con la inclusión de criterios para modificaciones sustanciales del artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, eran necesarias una actualización y una nueva redacción de los criterios aplicando una clara voluntad de simplificación.

Finalmente, también destacamos el Acuerdo de Govern de 7 de marzo de 2017, por el que se aprueba el Plan de Transporte de Viajeros de Cataluña 2020. El objetivo de este Plan es que el transporte público sea una alternativa

real para atender las necesidades de movilidad y contribuya a la lucha contra el cambio climático, a la mejora de la calidad del aire y a la seguridad vial.

Sumari: 1. Introducció. 2. La Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i el seu impacte mediambiental. 3. L'impacte de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, sobre la legislació ambiental. 3.1. Cànon sobre la disposició del desaprofitament dels residus i de l'aigua. 3.2. L'impost sobre els grans establiments comercials. 3.3. L'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics. 3.4. L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. 3.5. La modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme. 3.6. Modificacions legislatives pel que fa a ordenació ambiental. a) La modificació de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient. b) La modificació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus. c) La modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 3.7. Modificacions legislatives pel que fa a ordenació d'aigües. 3.8. Modificacions legislatives en matèria de medi natural. 3.9. La modificació de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 4. Altres normes i actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció mediambiental.

1. INTRODUCCIÓ

Durant el període objecte d'anàlisi (de l'1 d'octubre de 2016 al 30 de març de 2017), ha tingut lloc un bon nombre de novetats normatives des del punt de vista ambiental a Catalunya, tot i que, curiosament, no s'ha aprovat cap norma amb rang de llei específicament ambiental. La tècnica legislativa emprada ha estat, com ja havia succeït en els anys anteriors, la utilització d'una llei d'acompanyament als pressupostos per modificar algunes lleis ambientals catalanes. De nou, s'utilitza la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives per introduir algunes reformes d'importància ambiental, però també per crear tributs propis. En efecte, per mitjà de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, s'han modificat, entre altres lleis ambientals, la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals; de la Llei 12/1985, d'espais naturals; de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la llei

reguladora dels residus; la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya; la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals; la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Així mateix, la Llei 5/2017 també ha creat dos nous tributs ambientals propis de la Generalitat de Catalunya: l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics, i l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Quant als projectes de llei en tràmit, en aquest període, cal destacar el Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continents, el qual en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya, celebrada el 22 de desembre de 2016, va superar el debat a la totalitat sense cap esmena; i continua el curs la tramitació del Projecte de llei de comerç, serveis i fires i el Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives.

Paral·lelament, s'estan gestant diverses iniciatives normatives de gran interès des del punt de vista ambiental. En primer lloc, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha engegat un procés participatiu amb els ens locals per a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de qualitat ambiental. En el marc d'aquest procés participatiu, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha organitzat, en col·laboració amb les diputacions, jornades informatives per exposar diversos aspectes de l'actual Llei 20/2009, i les casuístiques pel que fa a la seva aplicació, i, d'altra banda, avançar els objectius de l'Avantprojecte de llei de qualitat ambiental, que la pretén substituir. Els objectius estratègics que planteja l'Avantprojecte de llei són: transitar cap a una producció ambientalment sostenible, amb un ús eficient dels recursos i de l'energia i, per tant, més competitiva; evolucionar d'un model d'activitat intervinguda prèviament a un model d'empresari responsable; adaptar la normativa catalana al marc comunitari europeu i legislació bàsica; facilitar els règims de menys intervenció prèvia; disposar d'una base de dades ambiental d'activitats, i consolidar l'Administració electrònica en tots els règims d'intervenció. En segon

lloc, mitjançant l'Acord del Govern de 13 de desembre de 2016, s'ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de Llei d'ordenació del litoral, que s'ha de sotmetre a informació pública i audiència de les entitats afectades. L'Avantprojecte, publicat el passat 16 de gener de 2017 al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC), pretén ampliar la competència exclusiva pel que fa a l'ordenació del litoral que estableix l'article 149.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la competència en execució i gestió de les obres d'interès general situades en el litoral català, regulada en l'article 149.4 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a través de l'articulació d'un model de gestió integrada de l'espai costaner català, amb l'Administració de la Generalitat com a administració de referència i amb més protagonisme dels ajuntaments. Aquesta iniciativa legislativa, mitjançant els instruments d'ordenació i gestió, té com a finalitats: a) facilitar, per mitjà d'una planificació racional de les activitats, el desenvolupament sostenible de les zones costaneres, garantint que es tinguin en compte el medi ambient i els paisatges de manera conciliada amb el desenvolupament econòmic, social i cultural; b) preservar les zones costaneres, en benefici de les generacions presents i futures, i com a garantia del desenvolupament turístic i econòmic de qualitat; c) garantir la utilització sostenible dels recursos naturals; d) garantir la preservació de la integritat dels ecosistemes costaners així com dels paisatges costaners i de la geomorfologia costanera; e) prevenir i reduir els efectes dels riscos naturals i en particular del canvi climàtic, que puguin ser causats per activitats naturals o humanes; f) garantir la coherència entre les iniciatives públiques i privades i entre totes les decisions de les diverses autoritats públiques que afecten la utilització de la zona costanera³. Finalment, el Govern també ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de Llei de muntanya, que ha de substituir a la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya i que neix amb la voluntat següent: a) afavorir el creixement demogràfic i l'establiment de residents permanents, per a la superació de l'actual llindar de despoblament de moltes àrees de muntanya; b) fomentar la implantació i el desenvolupament d'empreses i projectes econòmics, amb la creació de polítiques d'atracció; c) preservar i, al mateix temps, posar en valor els actius territorials estratègics,

³ Art. 3 Avantprojecte de Llei d'ordenació del litoral.

entre els quals el patrimoni natural, arquitectònic, cultural i paisatgístic; d) minimitzar la posició territorial perifèrica respecte als principals nodes d'activitat, garantir la millora de la mobilitat i la comunicació i l'adequació dels serveis a les necessitats específiques; e) adaptar el conjunt de les polítiques públiques i la prestació de serveis a la realitat i especificitat dels àmbits de muntanya; f) promoure instruments de participació, proposta i concertació.

2. LA LLEI 4/2017, DE 28 DE MARÇ, DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 I EL SEU IMPACTE MEDIAMBIENTAL

La Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 en el títol V inclou algunes normes tributàries que afecten el cànon de l'aigua. Concretament, determina els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials i assimilables i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació del cànon de l'aigua, a l'efecte de determinar el tipus de gravamen específic d'una manera individualitzada durant l'any 2017; els valors per establir la quota del cànon de l'aigua corresponent als establiments ramaders; i els valors per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos industrials d'aigua per a la producció d'energia elèctrica, efectuats per centrals hidroelèctriques.

Aquesta llei es completa amb 98 disposicions addicionals. Entre aquestes disposicions, en cal destacar quatre de l'àmbit ambiental. En primer lloc, la disposició addicional 9 crea el Fons de Lluita Contra el Canvi Climàtic, que té l'objectiu d'impulsar actuacions relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic. Aquest fons, es dota, com a mínim, amb el 25% dels ingressos obtinguts, si s'aprova, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica amb emissions de CO₂.

En segon lloc, la disposició addicional 10 crea el Fons del Patrimoni Natural. Té l'objectiu d'impulsar actuacions relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic i estableix que s'ha de dotar, com a mínim, amb el 25% dels ingressos obtinguts, si s'aprova, de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica amb emissions de CO₂.

En tercer lloc, la disposició addicional 92 estableix que el Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la realització d'una sèrie d'actuacions amb incidència mediambiental.

Finalment, la disposició addicional 96 estableix que el Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per 2017, ha de dedicar una partida per dur a terme actuacions de reforestació, manteniment i neteja en determinats espais naturals.

3. L'IMPACTE DE LA LLEI 5/2017, DE 28 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC I DE CREACIÓ I REGULACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE GRANS ESTABLIMENTS COMERCIALS, SOBRE ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS, SOBRE ELEMENTS RADIOTÒXICS, SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES I SOBRE EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI, SOBRE LA LEGISLACIÓ AMBIENTAL

Recentment, s'ha publicat al DOGC la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. De nou, com ja s'havia fet anys abans, per mitjà de la Llei d'acompanyament dels pressupostos, s'aprova una bateria de modificacions legislatives que afecten el medi ambient o els àmbits connexos. Però es modifiquen altres lleis en diversos àmbits que van des de mesures administratives pel que fa a habitatge i urbanisme, d'ordenació ambiental, d'ordenació d'aigües i d'ordenació territorial; així com de medi natural, agricultura, pesca i alimentació, infraestructures i mobilitat; de residus, polítiques socials, polítiques sanitàries, espectacles públics i activitats recreatives, turisme, consum, seguretat pública, codi civil, ordenació d'equipaments comercials, ports de la Generalitat. També mesures administratives de simplificació del règim d'intervenció de les activitats econòmiques, de contractació pública, pel que fa a la funció pública, patrimoni, finances públiques, taxes i preus públics, entre altres matèries. Aquesta tècnica

legislativa mereix ser objecte de crítica, ja que es regulen en un text únic les modificacions de diverses normes amb rang de llei, sobre matèries molt diverses, sense connexió entre si.

A l'efecte d'aquesta crònica, ens centrarem en les principals modificacions des del punt de vista ambiental. Tot això sense oblidar que també en el marc d'aquesta llei s'inclouen algunes modificacions que afecten algunes taxes (entre altres, les de l'Agència de Residus de Catalunya; els permisos de caça major i menor; les dels serveis d'autorització ambiental d'activitats o les dels serveis de revisió, el control i la inspecció de certificats d'eficiència energètica dels edificis), i en el títol III, de la part tercera, "Mesures en l'àmbit del sector públic", algunes mesures de reestructuració i racionalització del sector públic que afecten, entre altres entitats de dret públic de la Generalitat, el Servei de Meteorològic de Catalunya, i el de Pesca i acció marítimes.

3.1. Cànon sobre la disposició del desaprofitament dels residus i de l'aigua

El títol I, dedicat als tributs propis, preveu les modificacions efectuades en relació amb el cànon sobre la disposició del desaprofitament dels residus i sobre el cànon de l'aigua.

L'article 1 de la Llei 5/2017 modifica la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànon sobre la disposició del desaprofitament dels residus. Amb aquesta modificació s'incrementa el tipus de gravamen a 47,10 euros per tona de desaprofitament de residus municipals destinats a dipòsit controlat. També s'incrementa el tipus de gravamen del cànon d'incineració de residus municipals. L'increment dels tipus de gravamen s'ha de dur a terme de forma gradual en el termini de quatre anys. Respecte al cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció, també es realitzen modificacions, es fixa el tipus de gravamen en la quantitat d'un euro i mig per tona fins al 31 de desembre de 2017. A més, s'afegeix un nou article 16 *undecies*, que estableix l'exempció al cànon de deposició controlada de residus industrials. Per als casos inclosos en aquest supòsit, s'estableix un procediment de devolució que s'ha d'efectuar a instàncies de part, sempre que s'acrediti fefaentment que s'ha satisfet el cànon.

Quant al cànon de l'aigua, les modificacions es dirigeixen a proporcionar incentius perquè els usuaris utilitzin eficientment els recursos hídrics, i introdueixen elements correctors de la càrrega impositiva per als usuaris de l'aigua que usen circuits geotèrmics i per als usos destinats a reg eficient. A més, dins de la consideració de beneficiaris de la tarifa social, s'hi afegeixen les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l'entitat subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les que hagi estat reconeguda la situació de risc d'exclusió residencial⁴ mitjançant un informe dels serveis socials de l'Administració local competent.

3.2. L'impost sobre els grans establiments comercials

La Llei 5/2017 reforma l'impost sobre els grans establiments comercials, i el defineix com un impost ambiental. Aquest impost grava la capacitat econòmica de determinats establiments comercials, que pel fet d'haver-se implantat en grans superfícies provoquen externalitats mediambientals negatives, com a conseqüència de l'afluència de vehicles particulars. Així, el fet imposable és l'impacte mediambiental derivat de la utilització de grans superfícies amb finalitats comercials.

Una modificació important és l'ampliació dels suposats subjectes a l'impost mitjançant la incorporació dels grans establiments comercials col·lectius i els grans establiments comercials que disposen d'una superfície de venda igual o superior als 1.300 metres quadrats i que estan situats fora de la trama urbana consolidada o, en el cas que aquesta no estigui definida, fora del nucli històric i del seu eixample (art. 7.2).

A més, es reformula la base imposable, la qual s'obté de l'aplicació d'una fórmula que recau sobre el paràmetre del nombre de vehicles que, durant el període impositiu, accedeixen a l'aparcament de què disposa l'establiment comercial. A aquesta base imposable s'hi ha d'aplicar una reducció de 27.000 vehicles en concepte de mínim exempt per obtenir la base liquidable (art. 11). Com a conseqüència d'aquesta nova configuració de la base imposable,

⁴ S'afegeix en un paràgraf nou al final de l'apartat 8 de l'article 69 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

s'estableix l'obligació per als subjectes passius de presentar l'autoliquidació i a efectuar el corresponent ingrés entre els dies 1 i 20 del mes de febrer següent a la data de meritació de l'impost.

3.3. L'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics

La Llei 5/2017, en el capítol VII del títol I, crea un nou tribut propi de la Generalitat, l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics.

L'objecte d'aquest impost és gravar el risc local mediambiental, i en última instància sobre les persones, que comporta: la producció d'elements radiotòxics generats en reaccions termonuclears; la manipulació i el transport d'aquests elements; la seva custòdia, mentre no siguin degudament neutralitzats o dipositats en un magatzem de llarga durada, i la seva dispersió, rutinària o accidental (art. 52).

D'acord amb l'article 53, els ingressos d'aquests impostos queden afectats per atendre al finançament dels mitjans i de les activitats i actuacions de protecció civil expressament destinats al control i, si escau, la reducció dels riscos derivats de l'activitat gravada. A més, es crea un fons amb el 20% de la recaptació efectiva de l'impost, que s'ha de destinar a finançar actuacions i accions dirigides a: la reactivació econòmica de les zones afectades per activitats gravades per l'impost; la prevenció i moderació dels riscos derivats de les activitats sotmeses a l'impost, i el manteniment i la renovació dels sistemes de control mesurament dels nivells d'elements radiotòxics al territori.

3.4. L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

La Llei 5/2017 també crea el tribut propi sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Aquest impost té per objecte gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles i que incideixen en l'increment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Es tracta d'un tribut finalista que ha de nodrir a parts iguals, amb els imports recaptats, el Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural (art. 84.2).

Constitueix el fet imposable les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per circular per les vies públiques inclosos en les categories següents (art. 85.1): a) turismes de la categoria M1: vehicles de motor de com a mínim quatre rodes, dissenyats i fabricats per transportar persones, de fins a un màxim de vuit seients; b) comercials lleugers de la categoria N1: vehicles destinats a transportar mercaderies amb una massa màxima admissible no superior o igual a 3,5 tones; c) motocicletes: vehicles de motor de com a mínim dues rodes, dissenyats i fabricats per transportar persones.

3.5. La modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme

En l'àmbit urbanístic, la Llei 5/2017 introdueix diverses modificacions en el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. En primer lloc, per mitjà de la modificació de l'apartat 2 de l'article 9, es determina que si a les zones de risc d'inundació o d'altres riscos, d'acord amb la legislació sectorial, es poden produir danys a les persones o béns, prevalen les limitacions d'ús del sòl establertes en la legislació sectorial. També s'especifica que fins i tot en el supòsit que la legislació sectorial no estableixi limitacions en aquestes zones de risc, tampoc es podran dur a terme actuacions de nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la intensitat de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni edificar en els terrenys situats en sòl no urbanitzable, tret que es tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri necessàries. A més, s'afegeix un apartat, el 2 bis, a l'article 9, que expressa que el planejament no pot establir determinacions que contravinguin o dificultin l'execució dels plans sectorials que gestionin els riscos, i en particular, ha d'adaptar les seves determinacions al que estableixin aquests plans en relació amb les edificacions i els usos preexistents.

En segon lloc, es modifiquen alguns preceptes reguladors del sòl no urbanitzable, entre els quals, es modifica l'apartat 2 de l'article 49, que afecta el procediment per a l'aprovació de projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable, els quals han de sotmetre's a l'informe de la comissió territorial d'urbanisme que correspongui, que ha d'emetre'l en el termini de dos

mesos a partir que disposi l'expedient. S'estableix la necessitat de tenir en compte, en l'aprovació dels projectes de noves construccions en sòls no urbanitzables, els possibles efectes sobre els aqüífers classificats, les zones vulnerables o les zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, a fi de minimitzar l'impacte sobre el medi i d'assolir els objectius ambientals definits per la Directiva 2000/60/CE, concretats en la planificació hidrològica.

D'altra banda, es modifica l'apartat 1 de l'article 50, regulador del procediment d'atorgament de llicències urbanístiques de projectes relatius a la reconstrucció i rehabilitació de les construccions en sòl no urbanitzable. En aquest cas, s'estableix que si els projectes són susceptibles de pertorbar el funcionament normal de les explotacions agràries de l'entorn immediat, en la memòria han d'incorporar una anàlisi d'afeccions agràries que avalui la incidència del projecte en relació amb el funcionament de les explotacions agràries existents i sobre les mesures eventuais per compatibilitzar-lo amb aquestes explotacions.

En tercer lloc, també s'estableixen modificacions que aborden la problemàtica dels càmpings situats en zones de risc d'inundació. En particular, s'afegeix una disposició addicional, la dinovena, que estableix que per poder mantenir l'activitat dels càmpings legalment implantats que, d'acord amb la legislació sectorial es trobin en zones de risc d'inundació que poden produir danys greus a les persones o els béns, els titulars han d'elaborar un pla de gestió del risc i pagar i, si escau, executar les mesures correctores que siguin necessàries per prevenir els danys, d'acord amb el pla especial urbanístic tramitat a tal fi.

3.6. Modificacions legislatives pel que fa a ordenació ambiental

Pel que fa a ordenació ambiental, la Llei 5/2017 ha modificat tres normes amb rang de llei des del punt de vista ambiental: la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la

lleï reguladora dels residus; i Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

a) La modificació de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient

La Llei 5/2017 modifica l'article 18 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental, i es determina que l'òrgan ambiental per als projectes i instal·lacions previstos en els annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, és la ponència ambiental. Però per al supòsit de projectes i instal·lacions no previstes en els annexos de la Llei 20/2009, l'òrgan competent és la direcció general del departament competent de medi ambient que exerceixi les funcions relatives a l'avaluació d'impacte ambiental en projectes d'infraestructures. També s'atribueix a l'òrgan ambiental competent en l'avaluació d'impacte ambiental el seguiment del compliment de la declaració d'impacte ambiental o de l'informe d'impacte ambiental, així com la potestat sancionadora.

b) La modificació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus

El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus, també s'ha modificat en un bon nombre de preceptes, per la qual cosa únicament destacarem algunes de les modificacions més importants. En primer lloc, s'afegeix un apartat, el 5, a l'article, en què es prohibeix el lliurament gratuït de borses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, inclòs el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, a excepció de les borses

compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes.

En segon lloc, s'afegeix un article, l'article 19 bis, sobre el sòl alterat. S'estableix que les persones causants d'alteracions al sòl han de presentar un programa de control i seguiment periòdic del sòl, o dels vapors o de les aigües subterrànies, que permeti valorar l'evolució de les substàncies contaminants en el temps i l'espai. El programa esmentat ha de ser aprovat per l'Agència de Residus de Catalunya en el termini de sis mesos a partir des de la presentació. Els resultats d'aquests controls periòdics han de lliurar-se a l'Agència de Residus de Catalunya amb la periodicitat que determina la resolució d'aprovació. També s'estableix que l'Administració pot requerir l'aportació d'un pla de millora ambiental, quan l'evolució de l'alteració s'estimi tècnicament no favorable. A més, es determina que l'Agència de Residus de Catalunya ha d'elaborar un registre administratiu dels sòls alterats en el qual es faci constar la informació ambiental relativa a l'emplaçament.

Finalment, també destaquem el nou article 19 ter, que introdueix els conceptes de *contaminació històrica* i *contaminació nova*. Es considera històrica "la contaminació o l'alteració d'un sòl produïda abans del 28 d'agost de 1994, data d'entrada en vigor de la Llei 6/1993, reguladora dels residus. En cas que no es pugui determinar el moment temporal en el qual es va produir la contaminació o l'alteració, es considera històrica la que té l'origen en una activitat implantada abans de la data esmentada, amb independència de la seva continuïtat en el temps". Per a aquesta mena de sòls, s'estableix que les mesures de descontaminació han de tenir com a finalitat retornar a aquest sòl la capacitat per dur a terme les funcions pròpies de l'ús al qual que estigués destinat segons el planejament vigent en el moment que es va produir la contaminació, garantint uns nivells de risc acceptables d'acord amb l'ús del sòl. En els casos històrics, per raons justificades de caràcter tècnic, econòmic o mediambiental, es permeten mesures de descontaminació recuperació tendents a reduir l'exposició, sempre que incloguin mesures permanents de contenció o confinament dels sòls afectats. No obstant això, es considera contaminació nova la que té lloc amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 6/1993. Per a aquests supòsits, les mesures de recuperació del sòl han de tenir com a

finalitat el restabliment del mateix a l'estat anterior a la contaminació o, si no es coneix, fins a arribar a un nivell de risc acceptable d'acord amb l'ús vigent present, sense perjudici del que estableix la lletra *f* de l'article 19. En aquest cas de nova contaminació, cal aplicar obligatòriament tècniques de recuperació tendents a l'eliminació del focus o de reducció de la concentració dels contaminants en el sòl. Excepcionalment poden admetre's la contenció o el confinament si es demostra la impossibilitat tècnica, econòmica o ambiental d'altres solucions de recuperació.

c) La modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats s'ha tornat a modificar per mitjà d'una llei d'acompanyament dels pressupostos. Però en aquesta ocasió, solament s'hi ha afegit un epígraf, l'1.44, a l'apartat 1 (Energia) de l'annex II, que estableix "centrals hidroelèctriques amb una potència superior a 10 MW". En coherència amb aquesta modificació, també s'afegeix un epígraf, l'1.14, a l'apartat 1 (Energia) de l'annex III, amb el text següent: "centrals hidroelèctriques amb una potència igual o inferior a 10 MW".

3.7. Modificacions legislatives pel que fa a ordenació d'aigües

La Llei 5/2017 també introdueix algunes modificacions en el Text refós de la legislació sobre aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. Aquestes modificacions afecten aspectes concrets de la regulació de l'Agència catalana de l'Aigua, i en general, de la legislació en matèria d'aigües, com el règim sancionador, els terminis en els procediments relatius a la seguretat de preses i embassaments, els sistemes de control dels cabals en derivacions de més de 10 hm³/any, els abocaments d'aigües residuals, entre altres aspectes.

3.8. Modificacions legislatives pel que fa al medi natural

Pel que fa al medi natural, la Llei 5/2017 ha modificat sis normes: la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals; la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals; la Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques; el Decret legislatiu 2/2008, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; la Llei 34/2010, de festes tradicionals amb bous, i la Llei 18/2001, d'orientació agrària.

Amb relació a la prevenció dels incendis forestals, es modifica l'apartat 4 de l'article 4 de la Llei 5/2003 per atribuir al municipi competència en els treballs de neteja als quals es refereixen les lletres *a*, *b* i *e* de l'article 3.1, si els subjectes obligats no els han realitzat.

La modificació de la Llei d'espais naturals respon en bona mesura a la seva necessitat d'adaptació a la legislació vigent una vegada transcorreguts trenta anys de l'aprovació de la norma.

Quant a la protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, s'afegeixen dues disposicions addicionals per adaptar-la a la Directiva 2010/63/UE, del Parlament i del Consell. Des d'aquesta perspectiva, es concreta, per exemple, que els centres descrits en el capítol III han de disposar de personal suficient in situ, i rebre l'educació i la formació adequades abans d'exercir la funció de cuidar dels animals, practicar l'eutanàsia, realitzar procediments amb animals i dissenyar projectes i procediments; i aquests centres han de disposar, en qualsevol cas, d'un veterinari amb coneixements i experiència en medicina d'animals de laboratori.

En relació amb la Llei de protecció dels animals, es modifiquen diversos aspectes destacables. En primer lloc, es modifica la lletra *a* de l'apartat 2 de l'article 24 per endurir els criteris per a la venda d'animals per Internet, i s'imposa l'obligació a les empreses proveïdores de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que fan publicitat de transaccions amb animals que han d'incloure en el seu sistema de difusió l'advertiment que els anunciants han d'incloure en els seus anuncis el número d'inscripció en el Registre de nuclis zoològics. En segon lloc, es modifica l'apartat 4 de l'article 46, amb la finalitat d'introduir la possibilitat de substituir la imposició de

sancions pecuniàries per sancions amb les quals es duguin a terme actuacions d'educació ambiental o de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals, en el cas de comissió, per primera vegada, d'infraccions de caràcter lleu. En tercer lloc, es modifica l'atribució competencial per a la imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei. I en últim lloc, s'afegeix un apartat a l'article 51 a fi de permetre la delegació de les competències sancionadores per la comissió de la infracció establerta per l'article 44.4.c als municipis, els consells comarcals o les entitats locals supramunicipals que ho sol·licitin.

Es modifica la Llei 34/2010, de festes tradicionals amb bous, suprimint de l'annex la "llista actualitzada dels municipis on se celebren festes tradicionals amb bous", tres municipis (Olot, Roses i Torroella de Montgrí).

Finalment, s'afegeix un capítol, el VII, a la Llei 18/2001, d'orientació agrària, que estableix el règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants i del personal tècnic habilitat redactor de plans de gestió de dejeccions ramaderes.

3.9. La modificació de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

Les modificacions legislatives de la Llei 5/2017 en matèria de simplificació del règim d'intervenció de les activitats econòmiques es concreten en la modificació de diversos articles de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. D'aquestes modificacions, en destaquem, en primer lloc, una sèrie de canvis que afecten els règims d'intervenció de les activitats econòmiques innòcues o de baix risc.

En segon lloc, es modifica la disposició addicional 7a de la Llei 16/2015, en relació amb la documentació necessària per a l'inici d'activitats que requereixen l'informe preceptiu favorable per risc d'incendi. Així per poder iniciar l'activitat, s'exigeix que la persona interessada ha d'obtenir i presentar a l'Ajuntament el

certificat d'acte de comprovació favorable pel que fa a prevenció i seguretat respecte a incendis i atendre els requisits i determinacions ambientals.

Finalment, es modifiquen determinats apartats de l'annex I ("Activitats sotmeses a règim de declaració responsable") i de l'annex II ("Activitats sotmeses a règim de comunicació").

4. ALTRES NORMES I ACTUACIONS D'INTERÈS DES DE LA PERSPECTIVA DE LA PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL

A més de les que hem ressenyat, en el període objecte d'anàlisi s'han aprovat altres normes i actuacions d'interès des de la perspectiva ambiental. En destaquem el Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2016-2021. Aquest decret es configura com l'instrument de la planificació hidrològica que té com a objecte determinar les accions i les mesures necessàries per aconseguir els objectius de la planificació hidrològica d'aquest districte, de conformitat amb el que estableix l'article 92 bis del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i en l'article 19 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, corresponent al segon cicle (2016-2021), està integrada pel Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2016-2021) i el seu programa de mesures. El programa de mesures s'acompanya del pla economicofinancer, de l'estudi ambiental estratègic i de la declaració ambiental estratègica. L'àmbit territorial d'aquest pla està constituït pel districte de conca fluvial de Catalunya, delimitat mitjançant el Decret 31/2009, de 14 de febrer.

Com a actuacions d'interès ambiental destaquem, en primer lloc, pel que fa al canvi climàtic, l'Acord GOV/6/2017, de 31 de gener, mitjançant el qual el Govern ha aprovat les bases per constituir un pacte nacional per a la transició energètica, resultant del procés de participació amb la Taula d'entitats i altres agents socials i acadèmics, com a document final consensuat en el marc del procés d'elaboració iniciat arran de l'Acord del Govern de 15 d'abril de 2014, sobre l'impuls del Pacte Nacional per a la Sobirania Energètica. Aquest document consensuat amb la societat civil estableix set eixos estratègics

d'actuació: garantir el dret fonamental d'accés a l'energia i la defensa dels drets dels consumidors; garantir el proveïment energètic amb qualitat i fiabilitat en el subministrament; aconseguir el màxim nivell d'estalvi i d'eficiència energètica en l'economia i societat catalanes; maximitzar la utilització de les fonts d'energia renovables; fonamentalment les autòctones; fomentar la recerca i la innovació energètica com a vectors d'eficiència i de creació d'activitats empresarials; democratitzar de l'energia i fomentar la participació de la societat en el model energètic, i exercir les competències plenes pel que fa a energia per part de les institucions catalanes en el marc de la Unió Europea.

També cal destacar que el Govern ha fet el seguiment i l'avaluació de les mesures previstes en l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, quatre anys més tard des que es va aprovar. Com a resultat d'aquesta tasca de seguiment i avaluació, es conclou que s'han impulsat el 83% de les mesures genèriques previstes en l'Estratègia, com ara: la redacció d'una llei catalana sobre el canvi climàtic; l'impuls de subvencions per estimular la redacció de plans d'adaptació de l'Administració local; la incorporació dels reptes del canvi climàtic a la planificació de les comarques a Catalunya; l'impuls de la publicació del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, i l'establiment d'un sistema de seguiment de les mesures previstes en l'Estratègia. També s'han iniciat el 72% de les mesures específiques, com ara la millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua i la promoció de la recerca dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat. Però únicament un 4% de les mesures genèriques i un 12% de les mesures específiques no han començat a aplicar-se. També es constata que, dels 11 sectors avaluats, 3 (gestió forestal, salut i urbanisme i habitatge) han obtingut una qualificació satisfactòria pel que fa a les mesures corresponents a la generació i transferència de coneixement; 6 han avançat, però encara han de millorar; i solament 2 sectors (indústria, serveis i comerç, i turisme) han obtingut una qualificació insatisfactòria. A més, paral·lelament, el Govern col·labora amb l'ONU en polítiques de desenvolupament urbà sostenible i contra el canvi climàtic. Aquesta col·laboració es va materialitzar el passat 20 de gener en la signatura d'un memoràndum d'enteniment per impulsar projectes conjunts de desenvolupament urbà sostenible i resiliència urbana. Això suposa la primera acció d'implementació i desenvolupament a

Catalunya, de l'anomenada Nova Agenda Urbana, aprovada el passat mes d'octubre en la tercera conferència de Nacions Unides sobre habitatge i desenvolupament urbà sostenible, l'Hàbitat III, que va tenir lloc a Quito, Equador.

També cal destacar el primer acord institucional per millorar la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona. Es tracta del primer gran compromís comú de les diferents administracions (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona i representants locals) per reduir les emissions vinculades al trànsit en un 30% en el termini de 15 anys.

A més, mitjançant l'Acord del Govern del dia 3 de gener de 2017, s'insta els òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic a complir una sèrie de previsions: prioritzar la compra, en primer lloc, de vehicles elèctrics i, en segon lloc, atenent principalment al tipus de recorregut, vehicles híbrids o de gas (biocombustible de gasolina); aplicar l'última versió de la Guia per a la compra verda de vehicles informada favorablement pel Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Però si no s'apliquen les prioritats indicades, els òrgans de contractació han d'emetre un informe justificatiu d'excepció. També s'insta els responsables de la gestió de les flotes de vehicles de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic a: incloure cursos de conducció eficient i de conducció de vehicles de baixes emissions en els plans de formació; donar de baixa els vehicles de gasoil Euro 3 o inferior, abans de finals de l'any 2018, tramitar-ne el desballestament en un centre autoritzat i obtenir el corresponent certificat de destrucció; i fer una diagnosi ambiental de la seva flota de vehicles d'acord amb l'informe d'avaluació del distintiu de garantia de qualitat ambiental per a les flotes. Amb aquestes mesures es pretén canviar el plantejament de les compres de vehicles de la Generalitat de Catalunya i contribuir a la millora de la qualitat ambiental i la reducció d'emissions.

En segon lloc, en l'àmbit de la contaminació lumínica, també cal destacar la Resolució publicada el 25 de gener de 2017 al DOGC, per la qual es declaren dos espais amb un cel nocturn de qualitat a Saldes (Berguedà). És el primer municipi que disposa d'aquest distintiu, que certifica les condicions que

permeten gaudir d'un medi natural nocturn de qualitat i que es considera convenient protegir mitjançant aquesta figura derivada del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

En tercer lloc, cal esmentar la Resolució TES/517/2017, de 10 de febrer, per la qual s'aprova el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya per al període 2017-2019; i la Resolució TES/518/2017, de 10 de febrer, per la qual s'aprova el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya per a l'any 2017. El Pla corresponent per al període 2017-2019 preveu el seguiment i la vigilància ambiental de 1.421 establiments, tots els autoritzats a Catalunya que es classifiquen en l'annex I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental. Aquest pla s'executa mitjançant programes anuals que, basats en el mateix pla, recullen la informació necessària per dur a terme les inspeccions ambientals que s'hi inclouen i prioritzen i, al mateix temps, els recursos necessaris. D'aquesta manera, també s'ha aprovat el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya per a l'any 2017, que preveu inspeccionar inicialment 683 establiments que representen un 48% del total del Pla 2017-2019. No obstant això, el programa també preveu la realització d'altres inspeccions ambientals "no programades", que poden ser motivades a fi de: verificar el cessament d'activitats; investigar denúncies; accidents i incidents; o comprovar la correcció dels incompliments declarats en inspeccions "programades".

Quant al règim d'intervenció ambiental, també cal destacar el document aprovat per la Ponència Ambiental, el 18 d'octubre de 2016, que conté la revisió i l'actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats. Aquests criteris estableixen els llindars a partir dels quals una modificació d'una activitat ha de considerar-se substancial. Sense haver-se dut a terme el desplegament reglamentari de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i amb la inclusió de criteris per a modificacions substancials de l'article 14 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats

de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny, calia l'actualització i una nova redacció dels criteris aplicant una clara voluntat de simplificació.

Finalment, també destaquem l'Acord de Govern de 7 de març de 2017, pel qual s'aprova el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020. L'objectiu d'aquest Pla és que el transport públic sigui una alternativa real per atendre les necessitats de mobilitat, i contribueixi a la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la qualitat de l'aire i la seguretat vial.